

# DEMOCRACIAS DE POBRES, DEMOCRACIAS POBRES, POBRES DEMOCRACIAS\*

Publicado originariamente en *Temas y Debates*, Año 7, N° 6 y 7. Rosario, noviembre de 2003, pp. 27-43.

WALDO ANSALDI\*\*

Porque vivimos a golpes, porque si apenas nos dejan  
decir que somos quienes somos (...).  
Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.

Gabriel Celaya, *La poesía es un arma cargada  
de futuro.*

## Breve introducción

En las transiciones de dictaduras a democracias políticas que se producen en América Latina en las décadas de 1980 y 1990, la gran novedad es la renuncia a transformaciones radicales. Esto es, a diferencia de los sesenta y comienzos de los setenta, en la década de 1980 la revolución se diluyó como posibilidad, aun cuando Nicaragua (triumfo del sandinismo) y El Salvador aparecieron como ratificación (a la postre, también relegada) de ella. A su vez, tanto las experiencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en Colombia -más ajustadas al modelo “clásico” de las guerrillas sesentistas-, cuanto la muy peculiar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en el estado de Chiapas, en México, no constituyen, al menos todavía, efectivas alternativas de poder, más allá de su innegable efecto político en el interior de sus respectivos países e incluso de la potencial internacionalización del conflicto colombiano, con su posible “efecto dominó”,

---

\* Una primera versión de este trabajo fue preparada para el *II Seminario Internacional “Nuestro Patrimonio Común”*, realizado por la Asociación Historia Actual en Cádiz (España), 22 a 24 de abril de 2002. La misma fue actualizada para su exposición en el *V Congreso Nacional sobre la Democracia*, organizado por el Centro de Estudiantes de Ciencia Política, Comunicación Social, Trabajo Social y Relaciones Internacionales y la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario (Argentina), 6 a 8 de noviembre de 2002. Finalmente, fue revisado a fines de diciembre del mismo año, a efectos de su publicación. El trabajo expone resultados parciales de la investigación *Nación, ciudadanía y derechos humanos en los países del Mercosur* (proyecto S 004 financiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires, Programación 2001-2003) y añade nuevos argumentos a los ya anticipados en Ansaldo (2000 y 2001).

\*\* Investigador del CONICET en el Instituto de Investigaciones Gino Germani (Área Sociología Histórica), Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Profesor titular de Historia Social Latinoamericana en la misma Facultad. E-mail: [waldo@redusers.com](mailto:waldo@redusers.com); URL: <http://www.catedras.fsoc.uba.ar/udishal>

especialmente si se concreta la eventual intervención militar estadounidense.

De un modo muy significativo, Norbert Lechner ha desarrollado esa idea del pasaje de una opción (o vía) a otra en uno de sus más conocidos artículos, mostrando cómo la demanda de revolución, en los sesenta-setenta, se transformó en una demanda de democracia en los ochenta.<sup>1</sup> Se puede coincidir o no con el argumento de Lechner, pero no se puede dejar de constatar que, en efecto, esto ha ocurrido en la agenda política y en la intelectual. La historia posterior aparece como una vuelta de tuerca que nos pone en una situación de encrucijada que requiere, en efecto, centrar la discusión sobre la viabilidad de la democracia en América Latina desde una perspectiva diferente a la que hemos estado considerando en los últimos años. No voy a hacer referencia aquí a esa distinción clásica entre democracia social y democracia política, ni a la postura que señala que sólo hay efectiva democratización cuando se pasa de la democracia política al estadio de la democracia social. La democracia social aparece hoy, para algunos, como un elemento del pasado y, en el caso de América Latina, como una utopía desechable (si no desechada), casi tanto como la revolución. Hay, en cambio, un énfasis muy fuerte en la democracia política, entendida en su forma clásica de democracia liberal representativa o democracia formal.

Más allá de algunas consignas -exitosas electoralmente, pero negativas políticamente-, según las cuales la democracia es la panacea de todos los problemas que debe resolver una sociedad (alimentación, educación, salud de sus integrantes), hoy está claro que la ola democratizante iniciada a comienzos de los años 1980 sólo está compuesta de elementos formales, importantes, sin duda, pero no sustantivos. Como he señalado en otra ocasión (Ansaldi, 2001: 24, n. 4), esta proposición no implica un juicio de valor acerca de ella. Es una mera constatación empírica, que no desconoce -todo lo contrario- la existencia de una cuestión clave, cuyo tratamiento escapa a los límites de este artículo, cual es la relación entre democracia y clases sociales o, si se prefiere, en qué medida la democracia es una forma política de la dominación de clase, un instrumento, una forma institucional neutra en términos clasistas, un campo de lucha por la hegemonía, un sinónimo de socialismo, una forma de vida, una forma de sociedad u otra cualesquier cosa. En la tradición socialista, la posición de Rosa Luxemburg sigue siendo una fructífera línea, tanto de reflexión teórica cuanto de práctica

---

<sup>1</sup> Norbert Lechner, "De la revolución a la democracia", artículo del cual hay varias ediciones en español (amén de una en italiano y otra en francés). Puede verse en *Leviatán*, n° 21, Madrid, octubre de 1985, pp. 103-113, *La Ciudad Futura*, n° 2, Buenos Aires, octubre de 1986, pp. 33-35, *Síntesis*, 1, Madrid, 1987, pp. 3-20 y en el libro de su autor, *Los patios interiores de la democracia*, 1ª edición, FLACSO, Santiago de Chile, 1988, pp. 21-43.

política. Ella es muy clara: “Sin sufragio universal, sin libertad de prensa y reunión indiscriminada, sin una lucha de opiniones libre parece la vida en toda institución política y se convierte en una vida aparente en la cual la burocracia es el único elemento activo” (en *Die russische Revolution*). Para Rosa, la libertad del *otro* -es decir, la del disidente- es una clave de la construcción del socialismo como democracia.

No hemos avanzado mucho en la dirección de repensar a la democracia, sustantivamente, en el contexto de incorporación de América Latina a la globalización neoliberal. Tampoco en los efectos perversos de la licuación del ciudadano en simple votante, de la crisis de representatividad, de la ineficacia de instituciones claves de la democracia política representativo -especialmente el Parlamento-, del nexo Estado-empresarios ni, mucho menos, en las posibilidades, con fortalezas y debilidades, de formas embrionarias de democracia participativa, para citar apenas algunas cuestiones.

En la América Latina de hoy, el socialismo no está en el horizonte político inmediato, ni siquiera en aquellos países en los cuales la izquierda tiene peso político -Bolivia, Ecuador, aunque en este país la expresión tiene un sentido amplio-, ha llegado al gobierno -Brasil- o puede alcanzarlo -Uruguay-, pero hay un amplio espacio para construir efectivas alternativas políticas de ese signo o, contestatarias de izquierda, si se prefiere decirlo en otros términos. No es una tarea sencilla: no lo es el construir tal alternativa y la organización que la impulse y lidere; tampoco lo es -incluso es posible que sea más difícil aún- el hacerla efectiva en caso de acceder al gobierno. Es que en la América Latina de comienzos del siglo XXI, la nota dominante es la pobreza, en el plano interno de nuestras sociedades, y la peligrosa inconsecuencia norteamericana en materia de reconocimiento de las opciones tomadas -precisamente mediante la vía democrática que los Estados Unidos dicen preferir y defender- por los pueblos latinoamericanos. Cuando digo que la pobreza es la nota dominante, no estoy pensando solamente en la carencia de recursos económicos. Así, tenemos democracias de pobres, pero también democracias pobres y un incierto futuro que hace pensar en pobres democracias si persisten o se imponen ciertas tendencias hoy presentes.

### **Democracia de pobres**

Un indicador inequívoco de los efectos negativos producidos en las sociedades latinoamericanas por las políticas neoconservadoras de ajuste estructural es el incremento de la pobreza. No hay fuente estadística que no registre este dato. Así, por ejemplo, la información

consignada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su *Panorama Social* del bienio 2000-2001, muestra que entre 1980 y 1999 el número de hogares pobres de la región pasó de 24.200.000 a 41.300.000 (en términos relativos, 34,7 y 35,3 por ciento del total de hogares, respectivamente). A su vez, dentro de esos hogares pobres, 10.400.000, en 1980, y 16.300.000, en 1999, eran indigentes. Atendiendo a personas, los pobres pasaron de 135.900.000, en 1980, a 211.400.000, en 1999, y, dentro de ellos, los indigentes de 62.400.000 a 89.400.000, en los mismos años. La pobreza, a escala de la región, tiene una incidencia relativa mayor en el ámbito rural que en el urbano (54 % y 30 %, respectivamente), “pese a lo cual en 1999 los pobres urbanos ascendían a cerca de 134 millones y los rurales a 77 millones, debido a la proporción significativamente más alta de población residente en las áreas urbanas”.. En cambio, la indigencia es ligeramente superior en el espacio rural: 46 millones contra 43 millones (CEPAL, 2001: 14).

El incremento de la pobreza ha ido acompañado de un también brutal -probablemente desconocido en, al menos, los tiempos contemporáneos- aumento de la desigualdad de la distribución del ingreso y, *a fortiori*, de la riqueza. En contraste con la década de 1980 -la llamada, por la CEPAL, “década perdida” para el desarrollo-, la de 1990 registró importantes mejoras en los indicadores macroeconómicos, aunque la recuperación no dejó de estar atada a las turbulencias financieras producidas en el plano internacional (comenzando por el “efecto Tequila”) y se vio muy fuertemente afectada por los elevados costos sociales que tuvo la adhesión gubernamental a la ideología neoliberal (o neoconservadora-liberal) y, consecuentemente, la aplicación de políticas fundadas en el “Consenso de Washington”.<sup>2</sup> Si bien en 1997 la tasa de crecimiento fue, a escala regional, de 5,4 por ciento, la más alta en veinticinco años, en 1998 y 1999 las crisis asiática y brasileña, respectivamente, llevaron a la recesión. Adicionalmente, en 1998 algunos países sufrieron los impactos de dos fenómenos

---

<sup>2</sup> Aunque son bien conocidos, no es inútil recordar los lineamientos básicos del llamado, por John Williamson, *Consenso de Washington*. Éste no es otra cosa que una estrategia de estabilización económica definida por el gobierno estadounidense, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que persigue, según sus propulsores, reducir el “tamaño” del Estado mediante la privatización (desestatización) de empresas y servicios públicos, terminar con el déficit fiscal y abrir los mercados nacionales con el objetivo de acrecentar inversiones de capital externo que posibiliten un mayor crecimiento económico. Más específicamente, la estrategia del Consenso de Washington define diez principios de política económica aplicables mediante “paquetes” de recomendaciones políticas en tres materias: reformas macroeconómicas, reformas en el régimen de comercio exterior y fomento del desarrollo del sector privado de la economía. En el plano macroeconómico se encuentran la reforma y el disciplinamiento fiscales, la racionalización y el control del gasto público, la liberación financiera. En cuanto al régimen de comercio exterior, se propone la liberación de las importaciones, la eliminación de subsidios a industrias no competitivas, la reducción de tarifas aduaneras y la liberación de la tasa de cambio o, en su defecto, su fijación en una banda competitiva. Finalmente, en la tercera de las materias, se apunta a favorecer al sector privado mediante la desestatización o privatización, como se prefiera, el establecimiento de garantías a los derechos de propiedad privada, la desregulación y la captación de inversiones financieras directas.

naturales catastróficos, la corriente de El Niño, que afectó a las economías de Ecuador y Perú, y el huracán Mitch, que arruinó las de América Central, particularmente la de Honduras, país donde se estimó que el daño implicó un retroceso de treinta años.

Si bien la inflación fue una de las grandes derrotadas de la década de 1990 (excepto en Honduras), no ocurrió lo mismo con el déficit fiscal. A su vez, la apertura de la economía y la privatización de empresas públicas se tradujo en una fuerte corriente de inversiones de capital extranjero y, en contrapartida y sobre todo, la desnacionalización de las economías latinoamericanas que, en algún caso extremo, como en el de Argentina, llevó a la pérdida del control de recursos estratégicos tales como el petróleo y la energía eléctrica. Asimismo, el carácter volátil, especulativo que adquirió el movimiento de capitales externos, contribuyó a la generación de resultados francamente perversos en buena parte -cuando no la mayor- de las sociedades de la región.

Las políticas neoconservadoras de los años 1990 han producido una brutal fragmentación social, traducida en ruptura de los lazos de solidaridad y exacerbación de las desigualdades sociales. Tanto, como para poder decir que ha generado un régimen de *apartheid* social, toda vez que sus consecuencia y manifestación más visibles son la segregación socioeconómica y cultural de grandes mayorías demográficas. Este *apartheid* social opera en dos registros entrelazados: el de cada una de nuestras sociedades, consideradas en su dialéctica interna, y el del mundo globalizado. En uno y otro, las distancias que existen entre hombres y mujeres ubicados en diferentes planos de la pirámide social se han tornado crecientemente mayores. El impacto es de tal magnitud que la tendencia estructural y la lógica misma del régimen se orienta -de no mediar una acción correctora del resto de Estado que queda- hacia una aún mayor desigualdad social. Las recientes elecciones en Bolivia, Brasil y Ecuador muestran, en una primera lectura, que porcentajes significativos, incluso mayoritarios, de los ciudadanos han expresado inequívocamente un *dictum* por un cambio estratégico, incluso sin romper los marcos del sistema capitalista.

Según la CEPAL, sobre el final de la década de 1990, “la desigual distribución de los ingresos continuaba siendo un rasgo sobresaliente de la estructura económica y social de América Latina, lo que le ha valido ser considerada la región menos equitativa del mundo”.<sup>3</sup> Así,

---

<sup>3</sup> Una cuestión relevante, que no puede confundirse ni olvidarse: distribución de los ingresos y distribución de la riqueza no son sinónimos. Los indicadores cuantitativos disponibles hacen referencia a la primera, siendo lamentable

es dable apreciar que el 10 % de los hogares de mayores recursos se apropiaba de la porción más significativa de los ingresos y, por cierto -aun cuando sea más difícil de precisar- de la riqueza. Excepto Costa Rica, Cuba y Uruguay, ese estrato percibía en todos los demás países de la región más del 30 % de los ingresos, aunque, en rigor, en la mayoría de ellos ese porcentaje superaba el 35 %, contrastando con la situación del 40 % de los hogares más pobres, que percibían entre el 9 y el 15 por ciento de los ingresos totales. En Bolivia, Brasil y Nicaragua, el quintil (20 %) más rico tenía ingresos *per cápita* más de 30 veces superior a los del quintil más pobre. “En el caso de la relación de ingresos entre el decil más rico y los cuatro deciles más pobres, la mayor distancia se presenta en Brasil, donde el decil más acomodado tiene un ingreso 32 veces superior al de la suma de los cuatro primeros deciles, al tiempo que el promedio simple de la región equivale a 19.3 veces” (CEPAL, 2001: 17-18). No le faltaba razón a Fernando Henrique Cardoso cuando señalaba, al hacerse cargo de su primera presidencia, en 1994, que Brasil no es un país pobre, sino un país injusto. La afirmación vale para más de un país de la región, incluso para la otrora orgullosa Argentina.

Para la CEPAL (2001: 16), los valores arriba indicados representan, en algunos, casos una mejoría respecto de la década anterior, sin dejar de ser terribles. Así, Brasil (donde las políticas del Consenso de Washington se aplicaron mucho más moderadamente que en otros países), Chile (donde el gobierno de la Concordancia atenuó el salvajismo pinochetista) y Panamá redujeron la proporción de hogares pobres en más del 10 por ciento, mientras Costa Rica, Guatemala y Uruguay lo hicieron entre 5 y 10 por ciento. En contraste, Venezuela se situó en el polo opuesto, incrementando el número de hogares pobres del 34 al 46 % a lo largo de la década de 1990.

Un caso especial es el de Argentina, donde el decil más pobre pasó de una participación del 2,4 % en 1991, a tan sólo 1,4 % en 2000, al tiempo que el decil de los más ricos incrementó la suya del 35,3 al 36,6 % durante los mismos años. En 2001, con la crisis acentuándose, esos valores fueron, respectivamente, del 1,3 y 37,3 por ciento. Dicho de otra manera, en Argentina, la brecha entre los que perciben menos y quienes perciben más ingresos pasó prácticamente se duplicó a lo largo de once años: pasó de 15,2 veces en 1991 a 28,7 en 2001. La situación se agravó en 2002, tras la caída del gobierno del presidente De la Rúa, la desprolija salida de la convertibilidad y la consecuente devaluación y el mayor agravamiento de la crisis: bajo el

---

no disponer de otros para la segunda, los cuales, seguramente, mostrarían que en ella la desigualdad es todavía mayor.

gobierno del presidente Eduardo Duhalde, los pobres sumaban, en mayo de 2002, 18.500.000 (53 % de la población argentina), de los cuales casi nueve millones en condición de indigencia, subiendo a 21 millones (58 por ciento del total de la población del país) apenas cinco meses después, conforme las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). A fines de 2002, el decil de argentinos con mayores ingresos se apropiaba del 38.8 % de los mismos, mientras el decil más pobre se mantenía en 1,3 %, acentuando el proceso de desigualdad, que por entonces era ya de 29,8 veces entre unos y otros. Por el mismo tiempo, la prensa escrita y televisiva “descubrió” la muerte por desnutrición de niños en varias provincias del país, un dato no novedoso, aunque sí incrementando respecto del pasado. Así, una gran y cruel paradoja se hizo bien visible: en un país que otrora fuera conocido como el del ganado y las mieses, con una capacidad actual de producción de alimentos para más de 300 millones de personas, más de la mitad de la población pasa hambre. Una consecuencia terrible de esta situación, mirada en prospectiva, es que la mayor incidencia de la pobreza se observa en la banda etaria de 6 a 12 años (58 %), es decir, en la de escolaridad primaria, mientras el desempleo se ha acentuado en los jóvenes de 15 a 18 años, el 38,5 % de los cuales carecía, en octubre de 2001, de trabajo (contra 30 % en octubre de 2000).<sup>4</sup> Niños, adolescentes y jóvenes sin educación, sin trabajo, paupérrimos, con serios deterioros físicos y mentales (muchos de ellos irreversibles, especialmente los ocurridos entre la concepción y los primeros tres años) y una expectativa de vida cuantitativa y cualitativamente disminuida... Con indicadores como éstos, no cuesta imaginar mucho cómo será la sociedad argentina dentro de quince-veinte años.

A juicio de los analistas de la CEPAL, la mayoría de los hogares latinoamericanos pobres vive en viviendas sin acceso a agua potable y con más de tres personas por cuarto. Se caracterizan, también, por “una alta tasa de dependencia demográfica y baja densidad ocupacional”, con un jefe de familia escasamente escolarizado (menos de tres años) y en ocasiones desocupado. Los hijos -niños y jóvenes- poseen, también ellos, un escaso acceso a la educación y se incorporan tempranamente al mercado de trabajo, aunque muchos de ellos no estudian ni trabajan. “En términos absolutos, poco menos de 77 millones de habitantes de la región residen en viviendas hacinadas, condición que caracteriza al 29 % de los pobres y al 6 % de los no pobres. A su vez, 165 millones de personas, de las cuales más de 109 millones son

---

<sup>4</sup> Véase “Hay 7 millones de adolescentes y chicos que viven en la pobreza”, en *Clarín.net*, edición electrónica, miércoles 17 de abril de 2002, Sección Economía ([www.clarin.com.ar](http://www.clarin.com.ar)). Puede verse también en la edición en soporte papel del mismo día.

pobres, no tienen acceso al agua potable. Asimismo, el 39 % de los 130 millones de personas que viven en un hogar cuyo jefe tiene menos de tres años de estudio son pobres” (CEPAL, 2001: 18).

Otra fuente ratifica la creciente desigualdad económica en América Latina. En efecto, el Informe Mundial sobre la Riqueza, preparado anualmente por las firmas Merrill Lynch y Cap. Gemini-Ernst & Young señalaba, a mediados de 2002, que “los ricos latinoamericanos han demostrado tener una gran habilidad para acumular dinero”, a despecho de la crisis. Según dicho Informe, en 2001 existían en la región 280.000 personas con más de un millón de dólares en activos. Son denominadas *High Net Worth Individuals* (HNWI) y se encuentran principalmente en México y Brasil (90.000 en cada uno de estos países). Ellas concentraban 3.500 billones de dólares, 8 % más que en 2000 y 275 % más que en 1986. El crecimiento de la riqueza de los ricos latinoamericanos durante el año 2001, según los analistas de las firmas citadas, fue más del doble superior a la media mundial (3 %) e incluso mayor a la de los millonarios asiáticos (7,1 %). Por cierto, superaron largamente a sus pares norteamericanos y europeos, con incrementos de 1,7 y 0 por ciento, respectivamente.<sup>5</sup> Esos indicadores coinciden en buena medida con los del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el cual el incremento de los activos financieros superiores al millón de dólares -unos 300.000- fue del orden del 12 %, comparando 2001 con el año precedente. El BID coincide también en que el nivel de la tasa de enriquecimiento de los latinoamericanos más ricos fue del 8 por ciento. En contraste, señala el mismo organismo, 150 millones de habitantes de la región “viven” con menos de dos dólares diarios.

En síntesis, América Latina es hoy la región más desigual del mundo, siendo el promedio de diferencia entre el quintil más rico y el más pobre del orden de las 27 veces, en 2001. El 40 % de los hogares recibía, al comenzar el nuevo siglo, apenas el 15 % de los recursos totales. La pobreza se agrava en los casos de indígenas y afroamericanos, que constituyen el 40 % del total de la población latinoamericana, En países de alta proporción de unos u otros, como Bolivia, Brasil, Guatemala y México, ellos son el 60 por ciento de los pobres.

La desigualdad no puede reducirse sólo a la dimensión económica, esa que se mide según la participación en la distribución de los ingresos. No pueden soslayarse las dimensiones

---

<sup>5</sup> Ana Barón, “Aumentó el número de ricos y su fortuna en América Latina”, en *Clarín*, Buenos Aires, 19 de junio de 2002, p. 25.

social y cultural de la desigualdad, a menudo más difíciles de reducir que la económica. (Piénsese, por ejemplo, en el caso de la informática -el acceso y/o la inaccesibilidad a ella- como constituyente del capital social). Las tres dimensiones se interrelacionan, solapan y retroalimentan. No es necesaria demasiada perspicacia para advertir que esta cuestión nos lleva a la de la relación entre democracia y exclusión o, para retomar la expresión clásica, entre democracia y capitalismo. Es cierto que puede encarársela en términos de la relación entre las consecuencias de las políticas neoconservadoras de ajuste estructural y los derechos humanos. En esa dirección, Elizabeth Jelin (1996) se sitúa "en la perspectiva que analiza la relación entre democracia política, equidad económica y democracia social", para la cual "[l]a exclusión y la indigencia son la negación de derechos fundamentales. No puede haber democracia con niveles extremos de pobreza y exclusión, a menos que se defina como no humanos a un sector de la población".

Pero se puede -y se debe- ir más allá, en procura del núcleo duro de la cuestión. Así, por ejemplo, Carlos Strasser, un politólogo argentino de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), ha llamado la atención, en un breve texto, sobre la aparente paradoja de la situación del mundo actual, caracterizada, por un lado, por las mayores legitimidad y expansión territorial y demográfica de la democracia -como nunca antes y sin rivales- y, por el otro, el desarrollo de la desigualdad, la exclusión, la pobreza y el desempleo, aparentemente insólito e inesperado (Strasser, 2002). Strasser argumenta que este proceso, en rigor, es "perfectamente posible y aun esperable" y propone, inspirándose en Antonio Gramsci, "ver a la democracia (...) como la clave de bóveda política del sistema [capitalista], la que cierra el sistema y la que también lo legitima y/o disfraza, tal como disfraza en buena medida lo que el sistema necesita que sea disfrazado". Se trata de una línea interesante, a la cual será bueno prestar mucha atención, tarea que encuentra un aporte valioso en el libro de Ellen Meiksins Wood (2000).

## **Democracias pobres**

Mirada desde una perspectiva meramente institucional, la apariencia muestra, a lo largo de las dos últimas décadas del siglo XX y los primeros años del XXI, una consolidación de la democracia. Pero se trata sólo de una formalidad: hay elecciones periódicas, en muchos casos limpias y transparentes, si bien todavía persisten mecanismos clientelares e incluso casos como el del sonado fraude en las elecciones presidenciales peruanas de 2000, o el triunfo bien amañado de Jean-Bertrand Aristide, en Haití, entre otros; hay alternancia de partidos en el

ejercicio del gobierno, incluso en México, donde la hegemonía absoluta del PRI, verdadero Partido-Estado, se había prolongado a lo largo de siete décadas, configurando lo que algunos han llamado una “dictadura perfecta”; las fuerzas armadas no tienen ingerencia en las decisiones políticas o, donde aún poseen alguna, tienden a subordinarse al poder civil -tendencia visible, no exenta de dificultades, hasta en Chile, donde todavía se asiste a una democracia tutelada y, por tanto, a un proceso inconcluso de transición de la dictadura a la democracia, y Paraguay- y los golpes de Estado al estilo clásico no parecen probables o resultan muy difíciles de sostener, al menos en el corto plazo.

La división de poderes está estatuida constitucionalmente en todos los países latinoamericanos, pero ella no es necesariamente respetada y los avances del Ejecutivo sobre el Legislativo y el Judicial son una constante en buena parte, si no la mayoría, de ellos. Por añadidura, hay casos (Argentina, por ejemplo) en los cuales la administración de la justicia está altamente subordinada a los intereses políticos (en primer lugar, los gubernamentales). Se aprecian también situaciones de generalizada inobservancia de las disposiciones legales /Argentina, otra vez), tanto en lo que atañe a los derechos cuanto a los deberes. En consecuencia, el Estado de derecho es frágil. El presidencialismo se ha acentuado por doquier, en algunos casos (Argentina, Perú) reforzado por la introducción de la cláusula constitucional que permite la reelección inmediata y por la consagración del poco republicano procedimiento de los “decretos de necesidad y urgencia” que puede promulgar el presidente.

La ciudadanía política es prácticamente universal, pero en la práctica se asiste a una licuación del ciudadano en mero votante, cuando no en abstencionista. En efecto, la abstención -una de las manifestaciones de la creciente apatía política- es considerable en muchos países y hasta crece en países en los cuales el voto es obligatorio, como bien ilustra el caso de Argentina, un país donde los porcentajes de participación en las elecciones han sido históricamente muy altos (arriba del 80 por ciento).

Otra acción corrosiva de las democracias latinoamericanas actuales es la ejercida por la corrupción estructural. Su terrible expansión aparece potenciada por, o al menos asociada a, la generalización de la globalización neoliberal-conservadora. No estoy postulando una relación directa entre una y otra. En rigor, la corrupción estructural no es una novedad producida en la década de 1990: ella existe desde mucho antes, incluso socialmente aceptada y practicada (dentro de ciertos límites: evasión impositiva, coima a policías, conexiones clandestinas a

servicios de agua, luz y teléfono, por ejemplo), alcanzando niveles excepcionalmente altos ya no sólo en los casos clásicos de la Colombia dominada por el narcotráfico, el México hegemonizado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Paraguay stronista, sino también en Nicaragua, Argentina, Bolivia. Lo que la década de 1990 tiene de novedoso, al respecto, es la expansión y la mayor visibilidad de la corrupción estructural, a las que no son ajenos los procesos de privatización de empresas estatales -esto, es, un traspaso de riqueza del Estado al sector privado-, campo más que propicio para la apropiación ilegítima de recursos monetarios.

En agosto de 2002, la organización *International Transparency* dio a conocer su habitual informe anual sobre los niveles de corrupción en 102 países. Sus datos ratifican el peso de la misma en América Latina. Así, Chile, el país menos corrupto de la región, ocupa el 17º lugar (con 7.5 puntos, dentro de una escala que va de 0 -altamente corrupto- a 10 -altamente limpio), siguiéndole Uruguay (32º, con 5.1), Costa Rica (40º, con 4.5), Brasil y Perú (45º, con 4.0), Colombia y México (57º, con 3.6 puntos), El Salvador (62º, con 3.4), Panamá (67º, con 3.0), Argentina (70º, con 2.8), Honduras (71º, con 2.7), Nicaragua y Venezuela (81º, con 2.5), Bolivia (89º, con 2.2) y Paraguay (98º, con 1.7 puntos). En esa escala, Argentina aparece descendiendo, respecto de la medición del año anterior, del 50º al 57º puesto. Al respecto, el presidente de TI, Peter Eigen, señalaba que en dicho país "el Estado parece haber sido capturado por una red de dirigentes que lo usan en beneficio propio".<sup>6</sup>

Los efectos corrosivos de la corrupción son amplios. Se sienten en la economía, privando de recursos al Estado, distorsionando el mercado y operando como un impuesto regresivo; en la política, restando credibilidad en los políticos, los gobernantes y las propias instituciones; en la sociedad, minando el acatamiento de la legalidad y las redes de cooperación y solidaridad; en la cultura, generando prácticas y opiniones permisivas de las "bondades" de la venalidad y negativas sobre la "estupidez" de la observancia de los deberes, las que devienen tradición y refuerzan la continuidad de la corrupción y dificultan la lucha contra ella.

La corrupción dentro de (o tolerada por) los niveles más altos del Estado alienta su práctica en todos los escalones de la burocracia y en la propia sociedad. La ausencia de líneas directrices para la lucha frontal contra la corrupción, por parte de la cúpula del poder, no hace más que alimentar su práctica en los escalones subalternos. La extensión de la corrupción

estructural no es ajena a la pérdida de credibilidad en los políticos y en los partidos políticos, en las instituciones estatales en general, comenzando por el Congreso y la justicia (Argentina es, aquí, un caso paradigmático pero no único: en América Latina el Congreso es la institución con más pérdida de confianza ciudadana entre 1997 y 2002). En el caso de los partidos, esa carencia de credibilidad es inseparable de su creciente crisis de representatividad. La cuestión no afecta sólo a organizaciones y a políticos tradicionales: de hecho, la mayor extensión de la corrupción se observa tanto en los casos de presidentes pertenecientes a partidos tradicionales (tales, Carlos Andrés Pérez, en Venezuela, Carlos Menem, en Argentina, y Carlos Salinas de Gortari, en México), cuanto en los de reales o supuestos *outsiders* de la política (casos de Fernando Collor de Melo, en Brasil, Alberto Fujimori, en Perú, Abdalá Bucaram y Jamil Mahuad, en Ecuador). Un buen número de dirigentes sindicales aparece asociado, desde largo tiempo atrás, a la corrupción estructural (el charrismo mexicano, la burocracia sindical argentina, el *peleguismo* brasileño). Aunque se habla menos de ella, también debe tenerse muy en cuenta a la corrupción de empresarios y gestores de operaciones financieras.

La corrupción horada la confianza en las instituciones políticas y en la propia democracia, situación que se torna aún más grave cuando, como en el caso argentino, no hay virtualmente sanciones, ya no ejemplares sino de mera y elemental justicia. En ese sentido, no es un dato menor la constatación arrojada por varias y sucesivas encuestas de opinión pública, según las cuales los jueces (o la justicia), los políticos y los dirigentes sindicales gozan del menor grado de credibilidad (no superior, en el mejor de los casos, al 15 por ciento). Esos indicadores no son sensiblemente mejores en América Latina en conjunto: para Latinobarómetro, el Poder Judicial (33 %), el Congreso Nacional (27 %) y los partidos políticos (20 %) son las tres instituciones con menor confianza ciudadana, si bien el ambiguo “las personas” tiene también 20 por ciento. En contraste, la Iglesia Católica (72 %) y la televisión (60 %) aparecen como las instituciones con mayor grado de confianza. Como se aprecia, el panorama no es muy alentador.

Bien mirada, la extensión de la corrupción no es un dato explicable sólo por razones propias de cada sociedad. La corrupción incluye, como es obvio, la vinculación entre dos o más partes (quien solicita la coima y quien la acepta; quien la ofrece y quien la recibe). Muy a menudo, una de esas partes está representada por personeros de empresas extranjeras. Tal situación se suma a un contexto que expone a las democracias latinoamericanas a intensa

---

<sup>6</sup> “Argentina, cada vez peor en el ranking de corrupción”, en *Clarín*, Buenos Aires, 29 de agosto de 2002, p. 11.

doble presión, una endógena, la otra, exógena. La segunda proviene de la política exterior norteamericana, especialmente orientada en dirección belicista e intolerante después del 11 de setiembre de 2001. Se expresa de diversas maneras, pero siempre con grosería: harto grosera, en el caso de Venezuela; muy grosera, en el de Brasil y Bolivia; grosera, e incluso cínica, en el de Argentina. Pero aquí y ahora me interesa destacar el papel de la presión endógena, pues remite a los actores sociales y políticos principales a la hora de resolver la construcción de un régimen político. Las burguesías ya han dado muestras de desdén por la democracia si ella atenta contra sus intereses inmediatos, como lo prueba elocuentemente el caso de Venezuela - tanto cuando el abortado golpe de Estado contra el presidente Chávez (con una inequívoca apelación a la lógica de la guerra, en detrimento de la lógica de la política), en abril de 2002, cuanto el *lock-out* de diciembre del mismo año- y menos visiblemente el de Argentina, en ocasión de la acentuación de la crisis política a partir de diciembre de 2001.

Indicadores cuantitativos confiables muestran una situación ambigua por parte de los ciudadanos latinoamericanos respecto de la democracia. Si bien hay algunas señales positivas a las cuales conviene prestar atención, aun con toda la relatividad que se quiera, hay otras que son bien preocupantes. En ese sentido, los datos que surgen del último relevamiento de opinión realizado por la ya clásica organización *Latinobarómetro*, con sede en Santiago de Chile, son bien reveladores. En efecto, a diferencia de lo mostrado por el informe de mediados de 2001, el dado a conocer un año después indica que, al menos en catorce de los diecisiete países en los cuales se ha hecho la investigación, la mayoría de la población encuestada adhiere a la democracia (56 %) y distingue claramente el sistema político de las cada día menos confiables y representativas clases dirigentes.<sup>7</sup> Empero, la satisfacción con la democracia ha caído diez puntos, de 37 a 27 % (promedio regional), en el lapso de un año.<sup>8</sup>

La democracia encuentra su mayor nivel de credibilidad -como es previsible- en los dos países con más larga práctica en ella, Uruguay y Costa Rica, donde alcanza a 77 %.

---

<sup>7</sup> La investigación se realizó en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, dejando fuera a los cuatro países latinoamericanos del Caribe (Cuba, Dominicana, Haití y Puerto Rico).

<sup>8</sup> El apoyo a la democracia entre los latinoamericanos está por debajo del registrado por Eurobarómetro (78 %), Afrobarómetro (69 %), Barómetro asiático (61 %) y ligeramente por encima del constatado en las llamadas "nuevas democracias de Europa del Este" (53 %). A su vez, la satisfacción con la democracia es, entre los primeros, bastante menor que la expresada por africanos (58 %), asiáticos (55 %), europeos occidentales (53 %), y, otra vez, apenas superior a la que indican los europeos del este (29 por ciento). Eurobarómetro analiza a los países de la Unión Europea, Afrobarometer a sólo 12 países del continente y *New Democracies Barometer* a 9 países de la antigua Europa comunista.

Notablemente, Venezuela no se encuentra muy lejos, con 73 %, mientras dos de los países considerados grandes, Argentina y México, registran 65 y 63. En contraste, Brasil, con apenas 37 %, se sitúa en el escalón más bajo, no muy lejos de Colombia (39 %), El Salvador (49 %) y Paraguay (41 %). En Chile, una de las secuelas de la larga dictadura pinochetista se aprecia en un apoyo a la democracia por parte de sólo la mitad de la ciudadanía.

Chile y Ecuador (con 31 y 27 %, respectivamente) son los países en los cuales la indiferencia por el tipo de régimen alcanza los valores más elevados. En cambio, Costa Rica y Uruguay, otra vez, presentan los más bajos, con 7 y 9 por ciento, respectivamente.

La satisfacción con la democracia es mayor entre los costarricenses (75 %), seguidos por los hondureños (62 %), y menor entre paraguayos (7 %) y argentinos (8 %, dato bien relevante, pues en este país el apoyo a la democracia es de 65 por ciento). En Uruguay es de 53 %, en Chile, de 27 %, en Brasil, de 21 % y en México, de 18 por ciento.

La confianza en las Fuerzas Armadas es de 38 %, en promedio de quince de los países analizados, alcanzando su nivel más alto en Brasil (61 %), Colombia (57 %, cifra bien reveladora, teniendo en cuenta la existencia de fuerzas guerrilleras), Venezuela (54 %), Honduras (53 %) y Chile (50%). En cambio, Guatemala (25 %), Paraguay y Argentina (ambos con 30 %), presentan el grado más bajo de confianza, nada extraño si se recuerda el horror provocado por las políticas represivas utilizadas por los militares guatemaltecos y argentinos y la larga vinculación de sus pares paraguayos con la larguísima dictadura del general Stroessner.

La misma investigación muestra que 50 % de los entrevistados está dispuesto a aceptar un gobierno autoritario si éste resuelve los problemas de la sociedad, y 37 % opina que se puede pasar por encima de las leyes. Asimismo, 18 % (dos puntos más que en 2001) es indiferente al tipo de régimen (democrático o no democrático). Al mismo tiempo, se advierte el predominio de una concepción minimalista de la democracia, reducida a la existencia de libertad y elecciones, sin conceder relevancia a otras características de la democracia. “Un 50 % de los ciudadanos de la región quiere defender esos dos valores, tener presidentes elegidos y tener libertades civiles. Un 52 % también cree que los partidos políticos y el Congreso son indispensables, pero en promedio no le dan más de un 14 % de confianza a los partidos. Un 29 % solamente le tiene confianza a los gobiernos y un 36 los aprueba” (Latinobarómetro, 2002: 4).

El mismo estudio señala: “El respeto a las minorías, el gobierno de la mayoría, el sistema de partidos y la función del parlamento, bienes políticos esenciales de una democracia, carecen de importancia para los ciudadanos de América Latina.

“En primer lugar, las elecciones [27 %] y el desempeño económico [16 %] son los sinónimos de la democracia para los ciudadanos de América Latina, lo que demuestra claramente su mayor debilidad, el hacer depender el apoyo del sistema democrático del ingreso digno de los ciudadanos en el olvido de los bienes políticos” (Latinobarómetro, 2002: 11).

La pobreza de la democracia es, obviamente, debilidad, fragilidad de la democracia. Las condiciones socio-históricas de desarrollo de la democracia e, incluso, de la idea de democracia, en América Latina han definido condiciones estructurales, de larga duración, que han llevado a tal resultado. Como he señalado en otra ocasión, las tres matrices que modelaron las sociedades latinoamericanas -matrices societales generadas a partir de sendas unidades económicas de producción, la plantación esclavista, la hacienda semiservil y la estancia asalariada (véase Ansaldi, 2000 y, sobre todo, 2001)- nos ofrecen una clave de bóveda explicativa que, espero, podrá darnos mejores respuestas que las que tenemos ahora.

## **Pobres democracias**

La historia de la región, en efecto, muestra que la lucha por la democracia no cuenta, históricamente, con actores democráticos genuinos, capaces de, y/o con la fuerza suficiente para impulsar luchas por la construcción de regímenes políticos democráticos. Tanto las clases subalternas -proletarios, trabajadores, campesinos, incluso las clases medias urbanas-, cuanto las clases propietarias (sean burguesías o no) no siempre hicieron y/o hacen de la democracia política un horizonte político deseable, una conquista a lograr. A su turno, las experiencias con mayor acción transformadora -las populistas del cardenismo mexicano, el varguismo brasileño y el peronismo argentino, y las revolucionarias de México (otra vez), Bolivia, y Cuba- fueron mucho más efectivas en integrar las clases subalternas a la nación y a derechos de ciudadanía, sobre todo social, que en generar experiencias democráticas perdurables, en tanto espacio para dirimir y procesar disensos.

Hoy, tras el vendaval neoliberal, las condiciones de construcción de democracia en

América Latina son -o siguen siendo- precarias. Oscilamos entre la ficción y la esperanza y seguimos más cerca de la debilidad que de la fortaleza. Es un proceso cargado de una buena dosis de ambigüedad. Así como se constatan intentos (más serios y consistentes que en el pasado) por construir regímenes políticos genuinamente democráticos -no siempre democracias con contenido social, una demanda que está tornándose central en una región azotada por la tremenda desigualdad impulsada por las políticas de ajuste estructural neoconservador, como bien indican los resultados electorales de Brasil, Ecuador y, en buena medida, Bolivia-, se observa también una fuerte tensión entre demanda de mayor ciudadanía a los ciudadanos, por parte de actores más genuinamente democráticos, y demanda de mayor poder represivo a los gobernantes, por parte de actores democráticos sólo por oportunismo e interés.

El caso de comunidades indígenas históricamente ajenas, cuando no reacias, al juego democrático que han pasado -están pasando- a la acción política organizada y con cierto grado de autonomía -como son los casos de Ecuador y Bolivia-, ilustra muy bien la ambigüedad señalada, pues el carácter positivo que tiene el hecho se ve contrarrestado por la simétrica reacción de fuerte oposición por parte de las burguesías de ambos países. El potencial innovador que ofrecieron las asambleas vecinales (o barriales) de varias grandes ciudades argentinas inmediatamente después de las movilizaciones y acciones del 19 y 20 de diciembre de 2001, luego agostadas, podrá o no recuperarse, pero entre tanto ellas han dejado un sedimento en favor de la democracia mucho más sólido que en el pasado. Tenemos, pues, *condiciones de posibilidad*, no necesariamente *condiciones de realización*.

La cuestión es bien compleja. Aunque a menudo no es planteada explícitamente, cuando no es soslayada por completo, esa cuestión compleja no es nueva, sólo que ahora aparece resignificada, tras la crisis del socialismo como alternativa al capitalismo. Ahora bien, hasta donde, *en el contexto histórico-estructural latinoamericano*, es posible aunar democracia y capitalismo. Es una cuestión tanto teórica cuando de acción política, es decir, de praxis.

La consolidación del proceso de construcción de un régimen político democrático requiere, necesariamente, de la activa participación de las clases subalternas latinoamericanas -proletarios, trabajadores, campesinos, clases medias-, con una fuerte conciencia de sus derechos, una fortísima desconfianza vigilante respecto del papel de las burguesías -el caso brasileño es más excepcional que una tendencia a la regla- y la generación de una formidable y original capacidad de organización, acción y gestión. La experiencia del *Partidos dos*

*Trabalhadores* (PT) brasileño es bien elocuente y un ejemplo-faro. Pero ella se construyó a lo largo de dos décadas, un tiempo que parece demasiado largo para las urgencias actuales.

El trabajo de educación política, de una nueva educación política, se ha tornada más necesario que nunca. El punto de partida *promedio* en la región es bajo: según la investigación de Latinobarómetro (2002: 10), 52 % de los entrevistados considera que el desarrollo económico es más importante que la democracia (contra sólo 24 % que invierte la prelación), al tiempo que “para muchos latinoamericanos la democracia no significa algo que puedan expresar espontáneamente”. Así, en cuatro países -Brasil, El Salvador, Colombia y Guatemala-, la suma de quienes responden “no sabe” qué es la democracia y quienes directamente no responden a la pregunta da valores muy altos, por encima del 43 %, con pico en Brasil (59 + 4 = 63 %). En el otro extremo, venezolanos, argentinos, mexicanos y uruguayos -en ese orden y con valores que oscilan entre 12 y 15 %- aparecen como los ciudadanos que dan una respuesta positiva. El caso de Brasil es bien interesante, pues los ciudadanos y las ciudadanas que menos saben qué es la democracia, poco tiempo después protagonizaron el proceso electoral más innovador de toda la región. Si se descarta una mala praxis profesional por parte de los encuestadores y analistas de Latinobarómetro, habrá que prestar atención a tal ecuación, que es menos paradójica de lo aparentado. Es que aunque el PT es impulsor de una notable experiencia de democracia participativa -cuya expresión más conocida es la realizada en la prefectura de Porto Alegre-, es probable que un número harto considerable -si no la mayoría- de sus votantes optó por Lula presidente en pos del cambio de políticas económicas y sociales, entre las cuales la de “hambre cero”, con su promesa de asegurar tres comidas diarias para todos los brasileños, ha sido una de las decisivas. Si ello es así, es coherente con la opción del desarrollo económico por encima de la democracia antes señalada.

Para una política transformadora, otro resultado es más preocupante, constituyendo un obstáculo serio para construir la misma, si bien no exento -también él- de su cuota de ambigüedad.

Según Latinobarómetro (2002: 4-5 y cuadro s/n “Opinión sobre la economía de mercado”), 57 % de los entrevistados en su estudio considera que la economía de mercado es la más conveniente para su respectivo país, porcentaje que se eleva al 66 % en el caso de la subregión centroamericana. Nicaragua, Paraguay y Costa Rica -con adhesiones de 77, 72 y 70 %, respectivamente- son los países donde la economía de mercado logra los mayores niveles de adhesión, mientras Argentina, Chile y Perú -con 43, 48 y 49 %, respectivamente- tres de las

cuatro menores adhesiones. En México es de 66 %, en Venezuela, de 62, en Brasil y Colombia, de 56 por ciento. No dejan de ser llamativos los casos de Nicaragua, que atravesó la experiencia de la economía mixta impulsada por el sandinismo, y de Chile, paradigma de la economía de mercado impulsada por el neoliberalismo. Contrastando con esos altos valores de adhesión a la economía de mercado, los de satisfacción con sus logros es muy bajo, de 24 % promedio regional (pero de 42 % en América Central), con elevada dispersión entre el máximo y el mínimo de satisfacción. En Costa Rica se midió 53 %, pero en Argentina sólo 2 por ciento. En Paraguay fue de 7, en Perú, de 9 por ciento. En Colombia, la satisfacción fue de 11, en Chile de 19, en Venezuela de 23, en Brasil de 28 y en México de 34 por ciento. Uruguay, un país con una secular experiencia de intervención del Estado en la economía (que se remonta a la primera década del siglo XX, a partir del batllismo), la economía de mercado es considerada la más conveniente sólo por el 35 % de los entrevistados (es el país con el nivel más bajo), ubicándose la satisfacción con su funcionamiento en 10 por ciento.

Los analistas de Latinobarómetro concluyen: “los ciudadanos de América Latina reconocen la Democracia y el Mercado como los sistemas para llegar a ser países desarrollados (...). Por ello, con una cultura democrática en evolución y creciente, apoyan las estructuras democráticas y aprueban o desaprueban el desempeño de las élites. *La forma específica de la democracia y el mercado, sin embargo, es lo que está en discusión. (...) Todo ello augura tiempos con crecientes demandas*” (Latinobarómetro, 2002: 6; las itálicas son mías).

He aquí una cuestión que deberá merecer más, mejores y más profundos estudios. Los que se han realizado sobre las democracias latinoamericanas de fines del siglo XX han estado, por lo general, demasiado apegados a los aspectos institucionales de ellas, si desconocer las conexiones con el acelerado proceso de desigualdad. Son menos, en cambio, los que procuran establecer las relaciones entre el nuevo patrón de acumulación del capital y tales democracias.

Ellen Meiksins Wood ha (re)planteado muy bien el problema: “en realidad, la economía del capitalismo ha invadido y reducido el dominio extraeconómico. El capital ha ganado control privado sobre cuestiones que antes eran del dominio público y, al mismo tiempo, ha cedido responsabilidades sociales y políticas a un Estado formalmente separado. Incluso todos los ámbitos de la vida social que se encuentran justo afuera de las esferas de producción y apropiación, y fuera del control directo el capitalista, están sujetos a los imperativos del mercado y la mercantilización de los bienes extraeconómicos. Es difícil hallar un aspecto de la vida en la

sociedad capitalista que no esté profundamente determinado por la lógica del mercado”. Ahora bien, como señala más adelante la profesora de la Universidad York, en Toronto, “el mercado capitalista es un espacio tanto *político* cuanto *económico*, un terreno no sólo de libertad y opción, sino también de dominación y coerción”. Por eso, a su juicio, “es necesario repensar la democracia no sólo como una categoría política, sino económica” (Wood, 2000: 324 y 336).

Esa tarea de repensar la democracia es urgente y no puede dejar de lado su articulación con el proceso de globalización neoliberal, que es un proceso tanto económico cuanto social, político e ideológico. La articulación o el nexo entre Estado (mínimo) y grupos empresarios es una de las formas que adquiere ese proceso. Otra manifestación es la opción prioritaria del desarrollo económico por sobre la democracia -mayoritaria en la preferencia promedio de los ciudadanos latinoamericanos, como se ha visto-, elección que indica un triunfo ideológico del neoliberalismo. En efecto, éste privilegia la primacía del mercado en la definición de los mecanismos de *crecimiento* económico (un proceso cuantitativo), mas no de *desarrollo* (un proceso cualitativo), postergando la extensión y profundización de los derechos democráticos. Puesto en otros términos, el problema es el de la colisión entre intereses económicos y valores político-sociales democráticos. En sociedades como las latinoamericanas, con una historia de burguesías de rapiña, sin actores democráticos fuertes y con ciudadanos licuados, una política tal amenaza fuertemente el futuro inmediato de la democracia, aun cuando los proceso en curso en Brasil (sobre todo), Bolivia y Ecuador puedan servir de punto de inflexión.

Finalmente, no puede soslayarse el contexto internacional que, para América Latina significa, en primer lugar, la presencia y la política de los Estados Unidos. El conservadurismo, y hasta un fuerte dejo mesiánico, de la administración Bush hijo, no alientan al optimismo. Fuera del proyecto del ALCA -heredado del gobierno demócrata de Bill Clinton-, el interés actual de Estados Unidos en América Latina es muy bajo, sobre todo después del 11 de setiembre de 2001, y parece centrarse en pocos escenarios puntuales: Venezuela, por la cuestión del petróleo, Colombia, por la militarización del conflicto político y el narcotráfico (que incluye la peligrosa invitación del presidente Uribe a la intervención militar yanqui). La intervención grosera en las campañas electorales en Brasil y Bolivia y el abandono de Argentina a su suerte, tras la crisis exacerbada a partir de fines de 2001, más cierta preocupación (no necesariamente fundada) por las eventuales políticas del nuevo presidente ecuatoriano, Lino Gutiérrez, no alcanzan dimensión significativa. Pero está claro que la “lucha contra el Mal” que ha decidido liderar el presidente Bush, tiene un escenario y unos actores principales que no están en

América Latina -más allá, insisto, de la propaganda sobre una versión regional de ese eje, constituido por Fidel Castro, Hugo Chávez y Luis Inácio Lula da Silva- y que, cuando lo están aparecen claramente subordinados. En este sentido, el interés norteamericano por el desplazamiento antidemocrático del presidente venezolano -impúdico cuando el golpe de abril- se entiende mejor si se recuerda que Petróleos de Venezuela, una empresa estatal, es proveedora de Cuba y una joya que el capital privado quiere hacer suya a toda costa. La posibilidad de una guerra contra Irak -uno de los principales centros petroleros del mundo- potencia la necesidad norteamericana de controlar el crudo del país sudamericano. No es inútil recordar que tanto el presidente como el vicepresidente actuales de Estados Unidos son hombres vinculados, al menos en el pasado, a intereses petroleros. En medio de ese proceso, se encuentra el sonado caso de la empresa Enron, demasiado turbio como para no generar suspicacias, si no sospechas.

Finalmente, dentro de esta apretadísima referencia al plano de la política exterior, es bueno prestar atención a otro hecho que da buena cuenta de cómo ve a América Latina) y a lo que debe hacerse en ella) la administración Bush: el de la decisiva presencia de cubano-norteamericanos en puestos claves de ella. El anticomunismo visceral de esos funcionarios - más típico de los años de la *guerra fría*- deja poco margen para pensar en la existencia de un interés genuinamente democrático por la suerte de la democracia en la región.

En dos trabajos anteriores (Ansaldi, 2000 y 2001) he señalado que en el contexto histórico-estructural y actual parece claro que, si las palabras no quieren decir cualquier cosa, la democracia política -en su forma hoy dominante, la liberal representativa- está lejos de estar consolidada en América Latina. Más aún: las realmente existentes son *democracias políticas relativamente estables, no consolidadas ni, mucho menos, irreversibles*. Están aún más cerca de la precariedad que de la fortaleza. Añadía también que no era aventurado proponer que el aumento de las protestas sociales y, sobre todo, las eventuales posibilidades de dejar de ser un medio para hacer buenos negocios por parte de las burguesías locales, extranjeras y transnacionales, las democracias podían seguir siendo, en América Latina, no sólo una asignatura pendiente, sino también expresión de una nueva derrota popular. Poco después, la burguesía venezolana dio, en abril y en diciembre de 2002, la primera prueba empírica en tal dirección. Frente a ello, Brasil nos marca un camino posible: como acaba de decir el presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva, ese camino es el de la esperanza venciendo al miedo.



## Bibliografía

Ansaldi, Waldo (2000): "La democracia en América Latina, entre la ficción y la esperanza", en *Anales de la Cátedra Francisco Suárez*, N° 34, Universidad de Granada, Granada (España), pp. 173-197.

Ansaldi, Waldo (2001): "La democracia en América Latina, más cerca de la precariedad que de la fortaleza", en *Sociedad*, N° 19, Facultad de Ciencias Sociales UBA, Buenos Aires, diciembre, pp. 23-54. [También, en Internet: [www.catedras.fsoc.uba.ar/udishal](http://www.catedras.fsoc.uba.ar/udishal)].

CEPAL (2001): *Panorama social de América Latina 2000-2001*, Santiago de Chile. [También, en Internet: [www.eclac.cl](http://www.eclac.cl)].

Jelin, Elizabeth Jelin (1996): "¿Ciudadanía emergente o exclusión? Movimientos sociales y ONG en América Latina en los años 90", en *Sociedad*, N° 8, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, abril, pp. 57-81.

Latinobarómetro (2002): *Informe de prensa Latinobarómetro 2002*, en [www.latinobarometro.org](http://www.latinobarometro.org). [También se publicaron datos en *The Economist*, august 2002].

Strasser, Carlos (2002): "Democracia y desigualdad", en *El Político*, Año 2, N° 1, Buenos Aires, primavera, pp. 2-4.

Wood, Ellen Meiksins (2000). *Democracia contra capitalismo. La renovación del materialismo histórico*, Siglo Veintiuno Editores, en coedición con el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F. [La edición original, en inglés, es de 1995].